

Participación política indígena: Una asignatura pendiente

José Vargas, Director Programa Indígena Fundación Felipe Herrera

Los anuncios de la Presidenta Michelle Bachelet del 24 de Junio en materia de política indígena estuvieron basadas en tres pilares fundamentales: participación política, nueva institucionalidad y desarrollo territorial. Puntualizó la mandataria que las decisiones correspondientes se adoptarán una vez que concluyan los procesos de consulta, pues debe hacerse con participación de los pueblos indígenas. Y agregó la necesidad del reconocimiento constitucional y la definición de mecanismos de participación e ‘integración’ política de los pueblos originarios.

En ese contexto no deja de llamar la atención la omisión evidente dentro de los cambios al sistema binominal propuestos respecto de la necesidad de representación política de los pueblos indígenas.

La participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos y es el camino de proyección de los individuos como sujetos de derechos. Es la forma de tomar parte en los procesos de formulación, diseño e implementación de políticas públicas en un vínculo deliberante entre la sociedad civil y sus representantes. En Chile, históricamente las elites nacionales y el sistema político han impedido la participación política de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones, obviando que ellos constituyen el 12% de la población del país.

En los partidos políticos de centro izquierda se ha cultivado el mito de que “los indígenas siempre votan derecha”, eludiendo asumir seriamente el tema de la representación política de ese pueblo.

En ese contexto no resulta tan extraño el inmovilismo que ha dejado espacio para la imposición de las posturas de los sectores más refractarios a la participación política indígena.

Los resultados de las últimas elecciones presidenciales (donde la actual Presidenta prácticamente arrasó en las principales comunas donde residen mayoritariamente indígenas) indican a las claras que es hora de dejar de lado un mito asociado a estrechos cálculos político electorales, en los precisos momentos en que se ha instalado una expectativa de cambios en el seno de las comunidades en materia de política indígena.

La elite de la sociedad chilena, entre ella la llamada clase política, ha ignorado el desarrollo y transformación del movimiento indígena en un actor social, sujeto de derechos, tendiendo a identificarlo dentro de los sectores de pobreza del país que solo pueden aspirar a demandas reivindicativas para superar su vulnerabilidad.

Erradamente se ha conceptualizado que “los temas indígenas” son la pobreza y la vulnerabilidad. Así la elite continúa desconociendo los derechos de un pueblo/nación que habita en nuestro país antes de la formación del Estado Chileno.

Entonces no es tan extraño que cuando se presenta el primer proyecto de reforma al sistema binominal, la participación indígena en el Parlamento del país –como sí sucede en otros países- “brille por su ausencia”. No deja de llamar la atención que, excepcionalmente, haya sido la senadora Lily Pérez, quien reparara en esa omisión

Si la elite política y por consiguiente los partidos no se hacen cargo de esa gran asignatura pendiente, los pueblos originarios, desde la marginación, continuarán siendo objeto del ‘bicileteo’ político al que han sido sometidos históricamente.

Cuando se intenta, desde el gobierno, asumir el desafío de una nueva política pública para las comunidades indígenas, resulta ineludible hacerse cargo de una omisión histórica que no hace más que acentuar las desconfianzas en esas nuevas promesas

Llegó la hora de poner fin al tema indígena como preocupación política sólo cuando se producen movilizaciones y actos de violencia, redundando en la criminalización de la lucha reivindicativa que se estrella con la sordera de una elite que se resiste a abordar el tema central del reconocimiento de sus derechos colectivos como pueblo/nación.

La participación política indígena en todos los niveles de la institucionalidad, es una materia de desarrollo, consolidación democrática y gobernabilidad. Una asignatura pendiente para este período de gobierno.